

WORKING PAPER

No. 08, 2025

El Estado Desarrollador en Japón: Análisis Histórico de los Siglos XIX y XX y sus Lecciones para América Latina

Adolfo Alberto Laborde Carranco

About the author

Adolfo Alberto Laborde Carranco es Profesor Investigador de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE, México.

About UNU-CRIS

The United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) is a research and training institute of the United Nations University, a global network engaged in research and capacity development to support the universal goals of the United Nations and generate new knowledge and ideas. Based in Bruges, UNU-CRIS focuses on the provision of global and regional public goods, and on processes and consequences of intra- and inter-regional integration. The Institute aims to generate policy-relevant knowledge about new patterns of governance and cooperation and build capacity on a global and regional level. UNU-CRIS acts as a resource for the United Nations system, with strong links to other United Nations bodies dealing with the provision and management of international and regional public goods.

The mission of UNU-CRIS is to contribute to generate policy-relevant knowledge about new forms of governance and cooperation on the regional and global level, about patterns of collective action and decision-making.

UNU-CRIS focuses on issues of imminent concern to the United Nations, such as the 2030 Development Agenda and the challenges arising from new and evolving peace, security, economic and environmental developments regionally and globally. On these issues, the Institute will develop solutions based on research on new patterns of collective action and regional and global governance. The Institute endeavours to pair academic excellence with policy-relevant research in these domains.

For more information, please visit www.cris.unu.edu

in alliance with

Resumen

El presente trabajo tiene como cometido central conocer cuáles fueron los elementos particulares que le permitieron a Japón desarrollarse en la segunda mitad del Siglo XIX y cómo estos elementos se fueron insertando en un carácter nacional japonés que le permitió a este país expandirse (colonialismo) hasta 1945 cuando fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y cómo después del periodo de ocupación estadunidense, especialmente gracias al Tratado de Paz de San Francisco de 1951 que le regresa la “autonomía” a este país, vuelve a la senda del crecimiento y desarrollo económico (milagro económico japonés) “separando la política de la economía” o mejor conocida doctrina Yoshida. El trabajo plantea que estos procesos históricos pueden ser un marco de referencia para un camino hacia la industrialización e integración en América Latina. Partimos de la idea que marca que esto se dio gracias a un Estado Desarrollador y una serie de medidas que se pueden resumir en la creación de la industria pesada; un sistema educativo que se ajustó a la modernización del país; la aparición de grupos autocráticos tal es el caso del servicio profesional (el ejército fue un ejemplo y el servicio profesional de carrera de la burocracia estatal otro) y un Estado nacionalista. Partiendo de la realidad latinoamericana, algunos de estos elementos se pueden incorporar para dar paso a un proceso o modelo de última generación inspirado en la Alianza del Pacífico o el Mercosur que podrían dar pauta a un esquema supra-latinoamericano que permitiera la tan anhelada integración en la región.

Palabras clave

América Latina, integración, económica, industrialización, modelo, japonés.

Abstract

The central objective of this paper is to understand the specific elements that allowed Japan to develop in the second half of the 19th century and how these elements were incorporated into a Japanese national character that enabled the country to expand (colonialism) until 1945, when it was defeated in World War II. It also examines how, after the period of U.S. occupation, particularly thanks to the San Francisco Peace Treaty of 1951, which restored “autonomy” to Japan, the country returned to a path of economic growth and development (the Japanese economic miracle), by “separating politics from economics,” also known as the Yoshida Doctrine. The paper suggests that these historical processes can serve as a framework for a path toward industrialization and integration in Latin America. The premise is that Japan’s development was due to a developmental state and a series of measures that can be summarized as the creation of heavy industry; an educational system that adjusted to the country’s modernization; the emergence of autocratic groups, such as the professional services (the army was an example, and the career civil service in the state bureaucracy was another); and a nationalist state. Considering the Latin American reality, some of these elements could be incorporated to create a process or model of last-generation development inspired by the Pacific Alliance or Mercosur, which could pave the way for a supra-Latin American scheme that would allow for the much-desired regional integration.

Keywords

Latin America, economic integration, industrialization, Japanese model.

Indice

Resumen	3
Indice	4
Introducción al Desarrollo del Trabajo	5
La industrialización de Japón: previo a era Meiji a la antesala de la Segunda Guerra Mundial	5
Modelo de desarrollo de Japón: ¿Enseñanzas para América Latina?	9
Conclusiones	16
Referencias	17

Introducción al Desarrollo del Trabajo

El presente análisis titulado *El Estado Desarrollador en Japón: Análisis Histórico de los Siglos XIX y XX y sus Lecciones para América Latina* es el resultado de una investigación profunda y multidimensional. Se desarrolló con el objetivo de identificar los factores clave que impulsaron la transformación económica y social de Japón durante dos períodos históricos críticos: la era Meiji y el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo combina enfoques históricos, económicos y políticos para explorar cómo Japón construyó un modelo de Estado desarrollador, adaptado a su contexto socioeconómico y cultural.

El proceso de investigación se estructuró en tres etapas fundamentales. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura especializada, incluyendo textos seminales como los de Norman (2000), Johnson (1982) y Fajnzylber (1983). Este análisis permitió establecer las bases conceptuales del Estado desarrollador y su relevancia en el contexto japonés. En segundo lugar, se realizó un análisis comparativo, contrastando los casos históricos de Japón con las experiencias de industrialización e integración en América Latina. Esto permitió identificar similitudes, divergencias y lecciones aplicables para la región. Finalmente, se formularon propuestas concretas basadas en las experiencias japonesas, considerando las particularidades socioeconómicas y políticas de América Latina.

El desarrollo de este trabajo se caracterizó por un enfoque crítico y reflexivo, que no solo busca entender el modelo japonés, sino también evaluar su adaptabilidad en otros contextos. Al integrar perspectivas históricas con análisis contemporáneos, esta investigación ofrece un marco de referencia para repensar el desarrollo y la integración en América Latina, resaltando el potencial transformador de un Estado activo y planificador.

La industrialización de Japón: previo a era Meiji a la antesala de la Segunda Guerra Mundial

El proceso de industrialización y desarrollo en Japón ha sido estudiado bajo múltiples enfoques que destacan sus complejas raíces y evolución en la historia reciente del país. Algunos autores (Livingston; Moore & Oldfather, 1973) sostienen que las presiones de las potencias europeas, en particular la visita del Comodoro Perry en 1854, marcaron el fin del aislamiento japonés e iniciaron una nueva fase de desarrollo. Este evento histórico preparó el terreno para la modernización en Japón, poniendo fin al orden Tokugawa y dando paso a la era Meiji. No obstante, en este trabajo partimos de la premisa de que Japón, ya desde el siglo XVIII, había desarrollado bases precapitalistas que facilitaron el posterior proceso de modernización e industrialización, lo cual significó una ruptura decisiva con el sistema feudal en 1868.

Este proceso inicial de apertura y contacto con el exterior se consolidó a través de relaciones comerciales con países como Portugal, Holanda, y, en menor medida, con Corea y China. El puerto de Nagasaki, en la isla artificial de Dejima (出島), fue uno de los primeros puntos de conexión de Japón con el mundo exterior, donde ingresaron conocimientos y textos científicos, principalmente en portugués y holandés. Estos textos proporcionaron a la élite Tokugawa y a diversos señores feudales (*daimyō*) una visión del desarrollo científico y social en el extranjero, especialmente en relación con Holanda y China. Cabe destacar que la expulsión de misioneros jesuitas y otras órdenes religiosas, tanto antes como después del ascenso de la familia Tokugawa (1603-1868), consolidó un período de aislamiento que duró más de 250 años (Norman, 1940).

Si bien la Restauración Meiji marca el punto de inflexión en las transformaciones fundamentales hacia la modernización y el capitalismo, es esencial no subestimar los elementos y procesos sociales que ocurrieron durante la era Edo. Este período no solo estableció las bases para la posterior evolución hacia una sociedad moderna, sino que también implicó un cambio gradual desde una organización feudal basada en la tenencia de tierras y el tributo recolectado por cada *daimyō* para el *shōgun* hacia una estructura que favorecía un incipiente desarrollo capitalista.

Según Norman (1940), la política de aislamiento impuesta en Japón durante la era Tokugawa no erradicó por completo el contacto con el exterior ni su influencia comercial. Aunque Dejima sirvió como el puerto principal para la entrada de mercancías extranjeras, existieron otros puntos de intercambio. La región de Satsuma (hoy Kyushu), por ejemplo, mantuvo cierto grado de autonomía con respecto a las restricciones impuestas por el gobierno central, logrando establecer relaciones comerciales a través de las islas Ryūkyū (hoy Okinawa) con China y Corea. Esto facilitó una transformación gradual de la economía local y el surgimiento de una “economía del dinero,” impulsada por la clase mercante o “*chōnin*”, que promovió el crecimiento de almacenes (*tonya*) y de agentes financieros (*kuramoto*). La expansión de esta economía monetaria propició la concentración de

la tierra en pocas manos y la aparición de usureros, quienes, mediante la transferencia de tierras y préstamos, comenzaron a acumular riqueza, generando tensiones en el gobierno militar (*bakufu*) y desencadenando revueltas y crisis agrarias.

Otro factor que catalizó esta situación, además de la influencia externa, fue el abandono de los valores tradicionales de lealtad por parte de las clases bajas de samuráis y “*rōnin*”, quienes, en su mayoría empobrecidos y sin compromisos en una era de paz, aprovecharon su tiempo para informarse sobre los avances extranjeros. Así, el conocimiento externo comenzó a circular entre sectores de la población japonesa, ampliando su perspectiva en diversas áreas. Además, el temor a una invasión occidental instó al gobierno Tokugawa a abrirse gradualmente, al enfrentarse a misiones rusas (1792, 1804 y 1811), a la Guerra del Opio entre China y el Reino Unido que condujo al Tratado de Nankín (1842), a la llegada del Comodoro Perry (1853-1854), y a otros conflictos internacionales (la guerra de Crimea, la guerra Franco-Prusiana, y la intervención francesa en México, entre otros) que en cierto modo distrajeron a las potencias coloniales de sus intenciones expansionistas en Japón.

La apertura de Japón y la eventual caída del clan Tokugawa se vieron aceleradas por el aumento de precios de bienes de consumo, lo que desestabilizó la economía feudal del “*bakufu*” y provocó más revueltas campesinas y descontento en las clases bajas de samuráis. Esto sentó las bases del Estado moderno japonés, caracterizado por la consolidación de un ejército moderno capaz de defender el territorio, el establecimiento de una infraestructura industrial (especialmente en fundición y seda), y un sistema educativo adaptado a los requerimientos de la modernización. Asimismo, emergieron grupos autocráticos, como el servicio profesional en el ejército, y se desarrolló un Estado paternalista cuya meta era impedir la colonización extranjera (Norman, p. 47).

En cuanto a la dimensión política, la alianza entre los clanes Satsuma, Chōshū, Tosa y Hizen resultó fundamental para derrocar al antiguo régimen del “*bakufu*”. En este proceso, la nueva clase mercante (*shōnin*), especialmente los comerciantes de Osaka (Mitsui, Kunike, Iwasaki, Ono, Shimada), que controlaban el 70% de la riqueza nacional, brindaron préstamos (*goyokin*) al nuevo gobierno para la reconstrucción. A pesar de las rebeliones de samuráis en 1874 (Hizen) y 1877 (Satsuma) en un intento por restaurar el antiguo régimen, invadir Corea y expulsar a los extranjeros, estos intentos fracasaron. Muchos samuráis se adaptaron a roles en la administración pública, las fuerzas policiales o el ejército profesional.

En términos sociales, la transición hacia el nuevo orden se caracterizó por la renuncia de las prerrogativas de la oligarquía existente, como muestra de lealtad hacia el nuevo gobierno, mientras que algunos aristócratas se convirtieron en contrarrevolucionarios. Otros nobles de la era Edo ocuparon posiciones en la alta burocracia, o bien se transformaron en tenedores de bonos y en industriales de la nueva sociedad.

Durante el periodo de transición hacia la modernización, Japón experimentó una unificación tanto del mercado nacional como de su sistema monetario, desarrollando un sistema bancario sólido y promoviendo la libertad de comercio y de ocupación. La eliminación de controles sobre los cultivos permitió la expansión del mercado interno y facilitó la participación de comerciantes japoneses en el comercio internacional. En el ámbito político, la unificación nacional derivó en la creación de un censo de tierras y el surgimiento de las prefecturas, consolidando la administración territorial (Norman, 1940, p. 98).

A partir de estas transformaciones, los factores clave que favorecieron el establecimiento de un Estado moderno en Japón fueron los siguientes:

1. El liderazgo de los burócratas, quienes en su mayoría provenían de la clase samurái.
2. La abolición de los tratados extraterritoriales en 1899, que se hizo efectiva en 1910.
3. La eliminación de la amenaza de agresiones externas.
4. Un gobierno autocrático en manos de una nueva clase dirigente, cuya política fue flexible en ciertos aspectos para evitar crisis que pudieran poner en peligro el sistema emergente.

En cuanto a la industrialización temprana de Japón, Norman (1940) señala varios requisitos fundamentales: una producción y circulación de mercancías suficientemente desarrollada, una nueva división del trabajo y la acumulación de capital en manos de productores. Además, el surgimiento de una clase de trabajadores libres de vínculos feudales facilitó la oferta de mano de obra en el mercado.

El rol del gobierno central fue decisivo en este proceso, acelerando la acumulación de capital mediante políticas de subsidios y estímulos financieros. La reducción de impuestos sobre la tierra en 1876 y la alianza con grandes empresas permitieron consolidar la industrialización incipiente. Los préstamos gubernamentales también fueron clave para el establecimiento de sucursales empresariales en distintas regiones del país. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas quedaron a merced del capital bancario y de prestamistas, dando lugar a una nueva clase de industriales que fortaleció el sector financiero, integrado en parte por la antigua nobleza que comenzó a transformar su capital hacia actividades industriales (Livingston, Moore & Oldfather, 1973, p. 119).

El papel del capital extranjero, sin embargo, fue limitado. Japón registró únicamente dos préstamos de un banco inglés en 1873 para la construcción de un ferrocarril entre Yokohama y Tokio, y otro en ese mismo año para financiar compensaciones en comunicaciones y liquidez estatal. Ambos préstamos fueron saldados en 1881 y 1897, respectivamente. La fluctuación de las notas de crédito japonesas, el sistema de cambio bimétrico (oro-plata) y el temor a una influencia extranjera adicional contribuyeron a la baja inversión extranjera en el mercado japonés. Norman (1940, p. 117) sostiene que la limitada intervención extranjera reforzó características propias del capitalismo japonés, otorgando al Estado una posición predominante en el financiamiento de la oligarquía a través de impuestos altos, especialmente sobre el sector agrícola.

La industrialización en Japón no comenzó estrictamente en 1868 con la restauración Meiji, como se suele pensar. De acuerdo con Norman (1940), el proceso se había iniciado antes, cuando Japón introdujo tecnología extranjera para fabricar maquinaria y equipo militar. Ejemplos de esto incluyen los hornos de fundición establecidos por el clan Hizen en 1850, Satsuma en 1853, Mito en 1855, y el propio “bakufu” en 1853. En 1861, el gobierno Tokugawa inauguró una fundidora de hierro y, en 1865, con apoyo francés, se establecieron las fundidoras de Yokosuna y los primeros astilleros. Este temprano esfuerzo de modernización militar introdujo maquinaria y minería moderna, la cual fue confiscada y aprovechada por los líderes de la era Meiji para las industrias estratégicas del país.

En esta etapa, aunque la tecnología se encontraba en un estado precapitalista, la falta de emprendimiento y acumulación de capital limitaban el avance industrial. La integración de institutos extranjeros, como el Juho Kyoikujo, fue esencial para entrenar a japoneses en manufactura de armas, mientras que los mejores estudiantes fueron enviados al extranjero para mejorar sus habilidades. Adicionalmente, el desarrollo del transporte y las comunicaciones, en particular los ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono, contribuyó a la unificación nacional y se convirtió en una herramienta crucial para el gobierno y el ejército.

En el periodo Meiji, la política industrial se caracterizó por el control directo de industrias estratégicas, especialmente las relacionadas con la industria pesada y militar. En 1880, la ley “kojo Harai-sage Gaisokuen” reguló la transferencia de industrias, mientras el Departamento de Agricultura y Comercio (Noshomusho) implementaba esta política. Surgió una oligarquía financiera a través de los “Zaibatsu”, conglomerados como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda, que adquirieron empresas estatales a bajo costo, consolidando el poder económico y una estrecha relación entre negocios y gobierno, fundamental para el desarrollo económico de Japón (Livingston, Moore & Oldfater, 1973, p. 285).

La industrialización se consolidó gracias a factores como la creación de asentamientos agrícolas, nuevos propietarios, arrendatarios, y la emancipación de campesinos mediante la ley de impuestos de 1873, que impulsó el mercado laboral. Entre 1868 y 1877, las rebeliones campesinas, motivadas por la reducción de impuestos y el riesgo de usura, dieron origen a movimientos liberales antigubernamentales liderados por ex samuráis de clanes como Tosa, Hizen, Satsuma y Choshu, quienes más tarde fundaron partidos políticos, como el Partido Kinno o Sonno, que luchó contra el “Bakufu”.

Durante la década de 1870 surgieron asociaciones políticas como la Sociedad Pública de Patriotas (Aikokukoto), que buscaba representación popular. En 1881, se fundó el Partido Liberal (Jiyuto) y el Partido Reformador (Rikken Kashinto), representando a los “zaibatsu” como Mitsubishi. El Partido Constitucional Imperial (Rikken Teiseito), fundado en 1882, buscaba contrarrestar a los demás. El gobierno, temeroso de estos movimientos, estableció las asambleas de prefecturas (Fukenkai). En 1890, el Partido Liberal se reorganizó en un entorno de moderación tras la apertura de la Dieta (Livingston, Moore & Oldfater, 1973, p. 147).

La educación y formación técnica jugaron un papel importante en la industrialización, con el control gubernamental sobre educación primaria y secundaria en 1880, la nueva constitución de 1889 y la fundación de la Universidad Imperial de Tokio, clave para crear una burocracia de élite (Norman, 1940, p. 177).

Las relaciones internacionales fueron clave para la modernización. Tras el debate sobre la invasión de Corea en 1873, Japón firmó tratados con Rusia en 1884 y se enfrentó a China por el control coreano, culminando en la guerra sino-japonesa de 1894-1895. Pese a la intervención de Rusia, Francia y Alemania, Japón retuvo Taiwán. En 1899, la abolición de los tratados desiguales consolidó a Japón como potencia, seguido del Tratado anglo-japonés, su participación en la rebelión de los boxers (1900), el Acuerdo anglo-japonés contra Prusia en 1902 y la guerra ruso-japonesa de 1905, confirmaron su posición en Asia (Livingston, Moore & Oldhater, 1973, p. 217).

Las guerras de fines del siglo XIX y principios del XX impulsaron la economía japonesa a través del crecimiento industrial en el sector naval y armamentista. No obstante, la escasez de mano de obra aumentó las organizaciones laborales, mal vistas por el gobierno y empresarios. Tras la Primera Guerra Mundial, Japón enfrentó presiones económicas externas y la devaluación del yen, lo que generó inflación y un déficit en su balanza de pagos. El terremoto de 1923 en Tokio y la Gran Depresión de 1929 agravaron la situación, afectando a los “zaibatsu” y evidenciando la conexión de Japón con la economía global (Livingston, Moore & Oldhater, 1973, p. 336).

Durante los años 30, el militarismo y nacionalismo japoneses aumentaron con la invasión de China en 1936 y su entrada en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Los “zaibatsu” mantuvieron su control sobre la industria pesada, compartiendo poder con el gobierno militar, lo que consolidó una relación duradera entre las élites militares y los conglomerados empresariales (Livingston, Moore & Oldhater, 1973, p. 452).

La política económica de Japón en la posguerra fue directamente influenciada por cambios económicos y financieros globales, incluyendo la convertibilidad monetaria en 1947 y la devaluación de la libra esterlina en 1949. La asistencia de Estados Unidos y la Guerra de Corea en 1950 favorecieron una rápida recuperación del comercio internacional, beneficiando especialmente a Japón. En los años sesenta, la integración europea y la formación de la Comunidad Económica Europea impulsaron un crecimiento global, lo cual ayudó a estabilizar la economía japonesa.

La derrota en la Segunda Guerra Mundial obligó a Japón a adoptar reformas impuestas por las autoridades de ocupación, destacándose el desmantelamiento de los “zaibatsu” militarizados. Japón replanteó su política industrial para asegurar el acceso a materias primas y priorizar la exportación de manufacturas, dirigiéndose hacia una economía de mercado. Como sostiene Sumiya (2000) en *A History of Japanese Trade and Industry Policy*, la colaboración entre el gobierno y grandes corporaciones resultó clave para la reconstrucción económica; con el apoyo del Plan Marshall y políticas reformistas, Japón logró posicionarse como líder económico mundial.

En las décadas de 1960 y 1970, Japón desarrolló una economía “intensiva en conocimiento” que sofisticó sectores clave como la industria pesada, la petroquímica y el software. Kojima (1973) observa que esta transformación abrió el mercado a la importación de materias primas de países en desarrollo, lo cual incrementó las reservas internacionales y permitió a Japón alcanzar una balanza comercial favorable desde 1968. Este periodo estuvo marcado por un crecimiento económico sin precedentes, con una estructura tecnológica avanzada y sectores industriales que transformaron el mercado laboral y la productividad de los trabajadores (López, 1994).

Durante este tiempo, se consolidó el “Estado desarrollista” japonés, cuyo objetivo central era el desarrollo económico, según describe Johnson (1982). Este sistema involucró una relación estratégica entre el gobierno y el sector privado, en la cual la burocracia estatal desempeñó un rol fundamental en la orientación económica. Entre los elementos que configuraron esta relación estuvieron la formación de una élite burocrática, un sistema político que facilitaba la iniciativa burocrática, y la intervención estatal a través del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI, hoy METI).

A lo largo de los años sesenta, industrias como el acero, la construcción naval, y la petroquímica consolidaron su capacidad de producción mediante fusiones y concentraciones de capital, desarrollando oligopolios que defendían su posición frente a la competencia internacional. El crecimiento del mercado interno fue clave, facilitando el desarrollo de un entorno económico robusto que complementaba y promovía la expansión de las exportaciones.

En el ámbito político, la hegemonía del Partido Liberal Democrático (PLD) consolidó un sindicalismo empresarial, limitando la formación de grandes sindicatos sectoriales. Esta estructura permitió la implementación de reformas internas que mejoraron la

productividad, y la reforma agraria de posguerra distribuyó tierras a campesinos, fortaleciendo tanto el desarrollo agrícola como el poder conservador del PLD. En paralelo, un acuerdo de seguridad con Estados Unidos garantizó la estabilidad y seguridad en el contexto de la Guerra Fría, además de facilitar el acceso al mercado estadounidense.

Calder (1988) caracteriza la política económica japonesa como la de un “Estado Reactivo”, que responde estratégicamente a presiones externas para proteger sus intereses. Aunque Japón suele ser considerado un actor débil en el ámbito internacional, desde la Segunda Guerra Mundial y a través de programas de Asistencia Oficial para el Desarrollo (Laborde y Kobayashi, 2024), ha mantenido políticas que fortalecen su autonomía en la economía global.

Durante las últimas décadas, Japón ha enfrentado retos derivados de la globalización y la competencia internacional. Sumiya (2000) explora cómo el país ha adaptado sus políticas comerciales e industriales para mantener su competitividad en este entorno. Así, el Estado japonés ha logrado consolidarse como un actor racional, dirigiendo sus esfuerzos hacia una economía basada en el interés comercial en un contexto mundial.

Modelo de desarrollo de Japón: ¿Enseñanzas para América Latina?

En el contexto de América Latina, surge la interrogante sobre si el modelo japonés de desarrollo, que ha estado vigente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, puede ser considerado funcional o si, por el contrario, se debe utilizar únicamente como un marco de referencia. Para abordar la posible incorporación de elementos que facilitaron la industrialización y el desarrollo japonés en América Latina, es fundamental considerar cuatro investigaciones relevantes que anteceden este análisis. Me refiero al texto de Pipitone (2020), titulado “La salida del atraso”, al trabajo de Romero y Berasaluce (2020) sobre “El Estado Desarrollador: casos de éxito y lecciones para México”, y al estudio de Valdivieso (1997), “Experiencias de modernización y desarrollo relevantes para América Latina: El caso de Japón”. Finalmente, tenemos la obra de “La industrialización trunca en América Latina” Fajnzylber (1986).

En “La salida al atraso”, Pipitone (1994) explora las causas históricas y estructurales del subdesarrollo en América Latina. El autor argumenta que la región ha quedado atrapada en un ciclo de crecimiento económico desigual y dependencia externa. Mediante un análisis profundo de las políticas económicas y sociales implementadas desde mediados del siglo XX, Pipitone cuestiona las razones detrás del estancamiento económico y sugiere caminos alternativos hacia el desarrollo sostenible.

Pipitone inicia su obra exponiendo la problemática del subdesarrollo en América Latina, señalando que, a pesar de los esfuerzos por implementar políticas de modernización y crecimiento, los países de la región han experimentado un desarrollo económico fragmentado y, en muchos casos, regresivo. Este fenómeno se debe, en parte, a la dependencia estructural de las exportaciones de materias primas y a la falta de diversificación económica. El autor critica los modelos tradicionales de desarrollo que se han aplicado en América Latina, como la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y las políticas neoliberales impuestas a partir de los años ochenta. Según Pipitone, la ISI fracasó en crear una base industrial sólida y diversificada, mientras que las reformas neoliberales han contribuido a aumentar la desigualdad y la pobreza.

Dentro de este contexto, el autor sostiene que “el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para superar el atraso; se requiere un cambio estructural que incluya reformas en la distribución del ingreso y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”. Esta cita refleja su visión crítica hacia los modelos que priorizan el crecimiento a corto plazo, sin considerar los efectos a largo plazo en la cohesión social y la estabilidad política. Un aspecto central del libro es el papel de las élites económicas y políticas en la configuración de las políticas de desarrollo. Pipitone argumenta que estas élites han perpetuado un modelo económico basado en la concentración de la riqueza y el poder, lo que ha obstaculizado la implementación de reformas estructurales necesarias para un desarrollo más inclusivo. En este sentido, señala que “la falta de voluntad política para impulsar cambios profundos es uno de los principales obstáculos para el desarrollo en América Latina”.

Además, el autor subraya la importancia de contar con instituciones sólidas para el desarrollo económico y social. Argumenta que, sin estructuras institucionales robustas y transparentes, resulta imposible implementar políticas públicas efectivas que promuevan el bienestar general. En este marco, Pipitone enfatiza que la corrupción, la debilidad institucional y la falta de gobernabilidad son problemas estructurales que deben ser abordados para que la región pueda salir del atraso. Propone un

enfoque de desarrollo integral que trascienda las métricas tradicionales de crecimiento económico. Para Pipitone, es necesario redefinir el concepto de desarrollo, incluyendo aspectos como la equidad social, la distribución del ingreso, el acceso a la educación y la salud, y la protección del medio ambiente. En sus propias palabras, “el verdadero desarrollo no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico, sino que debe reflejar el bienestar y las oportunidades para toda la población.”

Entre sus propuestas, el autor sugiere:

1. Reformas Económicas y Sociales: Propuesta de implementar políticas redistributivas, como la reforma agraria y la mejora del sistema tributario, con el objetivo de reducir las desigualdades socioeconómicas. Aboga también por un aumento en la inversión en educación y salud, para mejorar el capital humano y fomentar una mayor movilidad social.
2. Diversificación Económica: Se plantea la necesidad de diversificar la estructura productiva de los países latinoamericanos, promoviendo sectores como la industria tecnológica, la economía del conocimiento y la manufactura avanzada. Esta diversificación es esencial, ya que la dependencia de las exportaciones de materias primas limita el potencial de crecimiento de la región y la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales.
3. Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas: Pipitone enfatiza la importancia de robustecer las instituciones democráticas y fomentar la participación ciudadana. Argumenta que, sin un sistema político que garantice la rendición de cuentas y la transparencia, es difícil implementar políticas que beneficien a la mayoría de la población.
4. Integración Regional: Defiende la necesidad de una mayor integración económica y política en América Latina, que permita la creación de un bloque regional capaz de negociar en mejores condiciones con las grandes economías globales. Esto incluye la coordinación de políticas comerciales, la inversión en infraestructura regional y la cooperación en investigación y desarrollo.

Pipitone sostiene que el camino hacia el desarrollo no es sencillo ni lineal. Señala que, para superar el atraso, América Latina necesita una visión estratégica a largo plazo que trascienda los ciclos políticos y las crisis económicas. “El desarrollo sostenible e inclusivo requiere de un pacto social amplio y de un compromiso genuino con la justicia social y la equidad”, concluye el autor. Así, “La salida al atraso” se presenta como una obra que invita a repensar las estrategias de desarrollo en América Latina desde una perspectiva crítica e inclusiva, proponiendo un cambio de paradigma que priorice el bienestar social y la sostenibilidad sobre el mero crecimiento económico.

Por su parte, la obra de Romero y Berasaluce (2020) ofrece un análisis exhaustivo sobre el concepto de “Estado desarrollador”, un modelo también conocido como “Estado desarrollista”. Este enfoque se distingue por la asunción de un papel proactivo del Estado en la promoción del desarrollo económico, a través de políticas públicas diseñadas para fomentar la industrialización y la innovación tecnológica. A diferencia del enfoque neoliberal, que confía en que el mercado se regule de manera eficiente, el Estado desarrollador reconoce la necesidad de una intervención estatal activa en la planificación económica, la regulación de sectores estratégicos y la coordinación de esfuerzos entre el sector público y el privado.

En este contexto, la obra enfatiza la relevancia de la capacidad estatal para implementar políticas a largo plazo, la creación de instituciones sólidas y transparentes, así como el desarrollo de una visión compartida de progreso y desarrollo entre los diferentes actores económicos y sociales. Este enfoque no solo busca estimular el crecimiento económico, sino también promover una inclusión social que garantice beneficios equitativos para toda la población.

En el primer capítulo del texto, se examina el caso de Corea del Sur, uno de los ejemplos más emblemáticos del modelo de Estado desarrollador. Durante las décadas de 1960 y 1970, Corea del Sur implementó una serie de planes quinquenales que sentaron las bases para su rápida industrialización. El gobierno surcoreano fomentó la creación de conglomerados industriales, conocidos como chaebols, tales como Samsung y Hyundai, que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de sectores estratégicos como la electrónica, la industria automotriz y la construcción naval. La estrecha relación entre el gobierno y el sector privado, junto con políticas educativas que elevaron el nivel del capital humano, permitieron a Corea del Sur

transformar su economía en una de las más avanzadas a nivel global. Además, se resalta la capacidad del Estado surcoreano para adaptarse a los cambios en la economía global, diversificando su estructura productiva hacia sectores de alta tecnología y servicios avanzados.

En el segundo capítulo, titulado “China: Reformas Graduales y Expansión Económica”, se presenta el caso de China como un ejemplo paradigmático de cómo un Estado fuerte puede guiar el crecimiento económico mediante reformas graduales y pragmáticas. Desde las reformas de apertura iniciadas por Deng Xiaoping en 1978, China ha combinado liberalización económica con un control estatal significativo sobre sectores estratégicos. La creación de Zonas Económicas Especiales (ZEEs) ha permitido atraer inversiones extranjeras y fomentar la transferencia de tecnología. Asimismo, China ha realizado inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, impulsando la innovación en áreas críticas como la inteligencia artificial y las energías renovables. Sin embargo, el modelo chino enfrenta desafíos, tales como la desigualdad regional y la sostenibilidad ambiental, que son analizados en detalle en la obra.

El capítulo tercero se centra en Vietnam y sus reformas Doi Moi, implementadas en 1986, que marcaron un giro significativo en su política económica al abrirse al mercado global. Estas reformas permitieron una transición desde una economía centralmente planificada hacia una economía de mercado orientada al socialismo. La política de “puertas abiertas” facilitó la atracción de inversión extranjera, especialmente en el sector manufacturero, lo que ha convertido a Vietnam en un importante exportador de productos textiles y electrónicos. El análisis del libro resalta cómo Vietnam ha logrado integrar su economía en el mercado global mientras mantiene un control estatal significativo sobre sectores clave, lo que le ha permitido experimentar un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas.

En el cuarto capítulo, titulado “India: Un Desarrollo Asimétrico pero Efectivo”, se presenta un contraste interesante con los otros casos analizados, dado su sistema político democrático y su gran diversidad regional. Aunque India no ha seguido un modelo centralizado de Estado desarrollador, ha tenido éxito en sectores específicos como la tecnología de la información y la industria farmacéutica. La creación de clústeres tecnológicos, especialmente en Bangalore, ha sido fundamental para el crecimiento de estos sectores emergentes. Este capítulo también aborda los retos que enfrenta India, tales como la desigualdad social y regional, la necesidad de reformas laborales y la modernización de su infraestructura para sostener su crecimiento económico.

El capítulo quinto, “Brasil: Avances y Retrocesos en el Desarrollo Industrial”, examina el caso de Brasil como uno de los ejemplos en América Latina que ha implementado políticas de desarrollo industrial con un rol prominente del Estado. Durante la segunda mitad del siglo XX, el gobierno brasileño promovió la creación de empresas estatales en sectores estratégicos, como la energía y la industria automotriz. No obstante, factores como la inestabilidad política, la corrupción y la dependencia de las exportaciones de productos básicos limitaron el éxito a largo plazo de este modelo. El capítulo extrae lecciones clave de la experiencia brasileña, subrayando la necesidad de instituciones fuertes y transparentes, así como la importancia de diversificar la base productiva y reducir la dependencia de sectores extractivos.

El capítulo sexto, “México: Retos y Oportunidades para un Estado Desarrollador”, explora las posibilidades de implementar un modelo de Estado desarrollador en el país. Los autores señalan que, aunque México ha tenido períodos de intervención estatal, como durante el “milagro mexicano” de mediados del siglo XX, en las últimas décadas ha predominado un enfoque neoliberal que ha llevado a una alta dependencia del comercio exterior y la inversión extranjera. Los desafíos actuales incluyen la falta de inversión en educación y desarrollo tecnológico, la debilidad institucional y la alta desigualdad social y regional. El libro sugiere que México podría aprender de los casos exitosos en Asia y América Latina, implementando políticas industriales dirigidas, fortaleciendo el capital humano y estableciendo un marco institucional que promueva un desarrollo más equitativo y sostenible.

En el caso de Japón, el capítulo 7 del libro de Romero y Berasaluce (2020) examina detalladamente la trayectoria del Estado desarrollador japonés, especialmente durante su expansión económica en la posguerra. Los autores subrayan que el éxito de Japón se fundamenta en una fuerte intervención estatal, caracterizada por una política económica que priorizó la industrialización bajo una estrategia gubernamental proactiva. Un elemento clave en este proceso fue el papel del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI), que se encargó de coordinar las políticas industriales, guiando la relación entre el Estado y el sector privado.

El MITI no solo seleccionaba sectores estratégicos, sino que también promovía la innovación tecnológica, lo que facilitó la transformación de Japón en una economía exportadora y competitiva a nivel global. Esta intervención estatal fue crucial para el desarrollo de industrias clave, permitiendo que Japón se convirtiera en un líder mundial en sectores como la electrónica, la automoción y la maquinaria. Además, el capítulo menciona la Doctrina Yoshida, que se refiere a la estrategia japonesa de enfocarse en el crecimiento económico mientras delegaba la defensa en su alianza con Estados Unidos. Esta separación entre las preocupaciones políticas y militares, combinada con un enfoque exclusivo en el desarrollo económico, permitió a Japón priorizar una industrialización acelerada, alcanzando una notable expansión económica durante las décadas de 1970 y 1980.

Los autores sugieren que el modelo japonés podría servir como una referencia útil para América Latina, particularmente en lo que respecta a la capacidad de un Estado fuerte y planificador para impulsar la industrialización, invertir en capital humano y fomentar la innovación tecnológica. Sin embargo, advierten que replicar este modelo en el contexto latinoamericano requiere considerar las diferencias contextuales, tales como la capacidad institucional y las realidades geopolíticas que caracterizan la región. El capítulo concluye enfatizando que el Estado desarrollador japonés no se limitó a la implementación de políticas económicas aisladas, sino que fue parte de una estrategia nacional integral que abarcó la educación, la innovación y la colaboración entre el Estado y las empresas para alcanzar un desarrollo sostenido.

El libro concluye que, aunque no existe un modelo único de Estado desarrollador que sea aplicable a todos los contextos, hay principios comunes que pueden adaptarse a la realidad de América Latina. Entre estos principios se destacan:

1. Desarrollo de Políticas Industriales Activas: Es fundamental fomentar sectores de alto valor agregado y promover la innovación y diversificación económica.
2. Inversión en Educación y Capacitación: Mejorar la calidad educativa y establecer programas de capacitación técnica que respondan a las necesidades del mercado laboral moderno.
3. Fortalecimiento Institucional: Es crucial reducir la corrupción y mejorar la eficiencia del gobierno para implementar políticas a largo plazo de manera efectiva.
4. Inclusión Social y Regional: Se deben diseñar políticas que busquen reducir la desigualdad y promuevan el desarrollo equitativo en todas las regiones del país.

En definitiva, el libro propone una reflexión sobre la necesidad de redefinir el papel del Estado en el desarrollo económico de México, aprovechando las lecciones extraídas de otros países que han logrado transformar sus economías y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones a través de un Estado proactivo y eficiente.

En este contexto, se hace pertinente citar el trabajo “Experiencias de modernización y desarrollo relevantes para América Latina: El caso de Japón”, de Valdivieso (1997), quien examina el proceso de modernización japonés desde mediados del siglo XIX, destacando su relevancia como un ejemplo para América Latina. Valdivieso se enfoca en las reformas estructurales implementadas en Japón durante la era Meiji (1868-1912), que sentaron las bases para el desarrollo industrial y la modernización económica del país.

El autor identifica varios factores clave en el éxito japonés, tales como la rápida industrialización, la integración del sistema educativo con las necesidades productivas y una política estatal activa que promovió la industrialización sin comprometer la cohesión social. Japón logró su desarrollo mediante una apropiación selectiva de modelos occidentales, adaptándolos a su propio contexto cultural y social. Según Valdivieso, estas lecciones son especialmente valiosas para América Latina, ya que la región ha enfrentado serias dificultades para consolidar procesos sostenidos de modernización y crecimiento económico.

Valdivieso argumenta que América Latina podría beneficiarse de una mayor intervención estatal en la economía, políticas educativas orientadas al desarrollo industrial y un enfoque más pragmático en la adopción de modelos extranjeros, en lugar de seguirlos de manera acrítica. El autor destaca un enfoque estructuralista en su análisis del desarrollo japonés y su posible

aplicación en América Latina. Japón se presenta como un ejemplo exitoso de “catch-up” o convergencia económica, donde un país no occidental logra cerrar la brecha con las potencias industrializadas mediante políticas deliberadas de modernización. Este enfoque contrasta notablemente con las teorías neoliberales que dominaron en América Latina durante los años 90, que enfatizaban la liberalización del mercado como motor principal del crecimiento.

Uno de los puntos fuertes del análisis de Valdivieso es su atención a la capacidad estatal para dirigir la transformación económica, una característica fundamental del desarrollo japonés. El autor subraya cómo Japón combinó una política industrial sólida con un sistema educativo que producía una fuerza laboral capacitada para satisfacer las demandas del mercado, algo que muchos países de América Latina no han logrado implementar de manera efectiva.

No obstante, un aspecto crítico en la propuesta de Valdivieso es que no aborda en profundidad las diferencias estructurales entre Japón y los países latinoamericanos, como las profundas desigualdades sociales y los niveles de inestabilidad política que caracterizan a muchas naciones de la región. Si bien el modelo japonés es inspirador, su replicabilidad en el contexto latinoamericano es cuestionable sin ajustes que consideren las particularidades locales. Valdivieso ofrece una lectura valiosa del desarrollo japonés como un modelo que América Latina podría estudiar, aunque su análisis podría subestimar algunos de los desafíos inherentes a la región que dificultan la implementación de estrategias similares.

Por su parte en la obra “La industrialización trunca en América Latina” de Fajnzylber (1983), representa una obra fundamental en la comprensión de las limitaciones estructurales del desarrollo en la región latinoamericana. Fajnzylber, un economista con una sólida formación estructuralista aborda en esta obra el fracaso relativo del modelo de sustitución de importaciones (ISI) y la incapacidad de las economías latinoamericanas de consolidar una industrialización autosuficiente, independiente y sostenible. A través de un análisis exhaustivo de los factores que determinaron la “industrialización trunca”, Fajnzylber (1983) plantea no solo una crítica a las políticas implementadas en América Latina, sino también un llamado a repensar el modelo de desarrollo desde una perspectiva que tome en cuenta las realidades sociales, económicas y políticas específicas de la región.

El autor introduce el término “industrialización trunca” para referirse a un proceso de industrialización que no logró generar una autonomía productiva en América Latina. En este sentido, define el fracaso de la industrialización en términos de una falta de competitividad y autosuficiencia que mantuvo a la región en un estado de dependencia estructural. A diferencia de los países asiáticos, que desarrollaron una industrialización competitiva y tecnológicamente avanzada, América Latina experimentó una “industrialización incompleta”, caracterizada por un sesgo hacia la importación de tecnología y bienes de capital, y una estructura productiva dominada por empresas extranjeras (Fajnzylber, 1983, pp. 12-14). Este modelo implicaba que, aunque la región podía producir internamente algunos bienes manufacturados, no lograba desarrollar una industria pesada propia ni un sector tecnológico de alto valor agregado.

La “industrialización trunca” reflejaba, entonces, una dependencia que iba más allá de lo comercial y se insertaba profundamente en las relaciones de producción y en la tecnología importada, generando un tipo de “heterogeneidad estructural” en la que conviven sectores altamente desarrollados, generalmente asociados al capital extranjero, junto con otros sectores rezagados en términos de productividad y acceso a tecnología (Fajnzylber, 1983, p. 27). Esta estructura dual o heterogénea explica, en parte, el bajo crecimiento económico y el fracaso en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región. En términos de Fajnzylber, la industrialización trunca es un proceso que “simula” una transformación industrial sin lograr sus efectos estructurales, exacerbando la dependencia y el subdesarrollo (Fajnzylber, 1983, p. 45).

Uno de los análisis más profundos de Fajnzylber (1983) en esta obra es la crítica al modelo de sustitución de importaciones, que fue ampliamente adoptado en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Si bien el ISI generó un crecimiento rápido en ciertos sectores industriales y permitió una reducción temporal de la dependencia de importaciones, Fajnzylber (1983) argumenta que este modelo no alcanzó a transformar estructuralmente la economía de la región. El ISI, según Fajnzylber, se implementó sin una visión estratégica hacia el largo plazo y sin una política de exportaciones que le diera sostenibilidad; es decir, no se promovió un desarrollo que pudiera integrar a América Latina en la economía mundial en condiciones de competitividad (Fajnzylber, 1983, pp. 58-63).

Además, el ISI dependía de la importación de bienes de capital y tecnología, lo cual generó un endeudamiento externo significativo y una dependencia de los países desarrollados para la adquisición de insumos básicos para la producción industrial (Fajnzylber, 1983, p. 72). En su análisis, Fajnzylber advierte que el modelo de sustitución de importaciones no tenía los incentivos adecuados para fomentar la innovación tecnológica local ni para promover el crecimiento de una clase empresarial nacional independiente del capital extranjero. Por el contrario, terminó beneficiando a las empresas multinacionales que controlaban el acceso a la tecnología y limitaban las posibilidades de desarrollo de una industria nacional autónoma (Fajnzylber, 1983, p. 85).

Otro concepto central en el análisis de Fajnzylber (1983) es el de “competitividad sistémica”. Este término enfatiza que la competitividad en los mercados internacionales no puede depender únicamente de las ventajas comparativas naturales, como los recursos abundantes y la mano de obra barata, sino que debe fundamentarse en una competitividad basada en el desarrollo tecnológico y en la eficiencia productiva. Fajnzylber (1983) observa que, en América Latina, la competitividad ha sido predominantemente “estática” y dependiente de sectores extractivos o de bajo valor agregado, en lugar de ser una competitividad “dinámica” que se nutra del conocimiento y la innovación (Fajnzylber, 1983, p. 96). Este tipo de competitividad dinámica sostiene Fajnzylber (1983), requiere una política de desarrollo que promueva la capacitación de la fuerza laboral, la inversión en investigación y desarrollo, y la generación de tecnología propia.

Para Fajnzylber (1983), uno de los grandes obstáculos para la competitividad sistémica en América Latina es la falta de un desarrollo endógeno; es decir, un proceso de desarrollo que tenga sus raíces en los recursos, capacidades y necesidades propias de la región, en lugar de depender exclusivamente de patrones de producción y consumo impuestos por el capital extranjero. En su obra, Fajnzylber argumenta que, sin una base de conocimiento y tecnología propia, la región nunca podrá alcanzar una competitividad real en el sistema internacional, y seguirá dependiendo de las condiciones impuestas por los centros económicos mundiales (Fajnzylber, 1983, pp. 110-113).

Fajnzylber (1983) también critica el papel que las élites económicas y los gobiernos latinoamericanos jugaron en la perpetuación de un modelo de desarrollo dependiente y desigual. En su análisis, las élites latinoamericanas, al aliarse con el capital extranjero, contribuyeron a consolidar una economía basada en la explotación de recursos naturales y en la producción de bienes de bajo valor agregado, en lugar de promover una industrialización basada en el conocimiento y la diversificación (Fajnzylber, 1983, p. 120). Según Fajnzylber (1983), esta falta de compromiso con un modelo de desarrollo autónomo refleja una dependencia estructural que no puede ser superada sin un cambio en la orientación de las políticas públicas.

En este sentido, Fajnzylber (1983) argumenta que el papel del Estado es fundamental para corregir las deficiencias estructurales de la economía latinoamericana. Propone que el Estado actúe como un promotor activo de la industrialización y la innovación tecnológica, mediante políticas que incentiven la creación de una base empresarial local, la integración de los sectores productivos y la diversificación de las exportaciones. Sin este papel activo del Estado, América Latina seguirá atrapada en el círculo vicioso de la dependencia y el subdesarrollo (Fajnzylber, 1983, pp. 132-135).

Fajnzylber (1983) también aborda la importancia de la integración regional como un componente clave para el desarrollo económico de América Latina. Al analizar casos de industrialización exitosa en otras partes del mundo, Fajnzylber (1983) destaca que la integración regional puede generar un mercado interno más amplio, lo cual permitiría alcanzar economías de escala y mayor eficiencia en la producción. En su análisis, la falta de integración en América Latina limita las oportunidades de desarrollo económico, ya que los mercados nacionales son demasiado pequeños para sostener una industria competitiva a nivel global (Fajnzylber, 1983, p. 140).

De esta manera, Fajnzylber (1983) aboga por la creación de un mercado regional que permita a los países latinoamericanos coordinar sus políticas industriales y reducir su dependencia de los mercados externos. La integración regional, en su visión, no solo contribuiría a la estabilidad económica, sino que también permitiría una mejor negociación en el sistema global, fortaleciendo la posición de América Latina frente a los países desarrollados (Fajnzylber, 1983, pp. 147-150).

Fajnzylber hace una crítica profunda a los modelos de desarrollo dependientes y plantea la necesidad de una estrategia de desarrollo basada en la autosuficiencia, la competitividad sistémica y la integración regional. Su análisis revela que los

problemas de industrialización en América Latina no se deben solo a políticas aisladas, sino a una estructura económica y social que perpetúa la dependencia y limita las posibilidades de crecimiento autónomo. La propuesta de Fajnzylber (1983), basada en una industrialización orientada a la innovación y el desarrollo tecnológico propio, continúa siendo relevante para la formulación de políticas de desarrollo en América Latina, ofreciendo un marco teórico que inspira tanto la crítica como la acción en busca de un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.

En cuanto a las lecciones de estos trabajos para América Latina, antes de pasar a la parte de las conclusiones del presente trabajo, debemos de dejar claro que el Estado desarrollador japonés, desde la época Meiji, ha sido un actor fundamental en la transformación económica, política y tecnológica de Japón. Este modelo no solo se benefició de las grandes transformaciones que se estaban produciendo a nivel internacional, sino que también se adaptó a las necesidades y capacidades propias del Estado japonés. La modernización, en muchos casos, requirió ajustes que respetaran las formas y tradiciones locales, como los métodos de toma de decisiones, dotando al proceso de un carácter distintivamente japonés. Autores como Alfredo Romero se refieren a esta adaptación como un “estilo híbrido” de desarrollo japonés, que combina influencias externas con elementos autóctonos.

En este contexto, es crucial señalar que la coyuntura internacional ha desempeñado un papel significativo en el éxito del Estado desarrollador japonés a lo largo de sus diversas etapas. No se puede analizar el modelo japonés sin considerar los acontecimientos en Asia, donde las potencias coloniales de la época —como Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos— centraron su atención en China, que representaba un importante mercado de materias primas y productos manufacturados. Esta dinámica permitió a Japón establecer una estrategia exterior ágil y eficaz, lo que le facilitó aprender e importar las tecnologías y prácticas que necesitaba para su desarrollo.

Un momento clave en este proceso fue la firma de los tratados de San Francisco en 1952, que restablecieron a Japón en la comunidad internacional, y la implementación de la Doctrina Yoshida, que separaba las esferas económica y política. La política de sustitución de importaciones, combinada con la existencia de un Estado desarrollador y un sistema burocrático robusto, como el MITI (hoy METI), permitió la creación de una política industrial coherente. Esta política se sustentó en las capacidades previamente instaladas, lo que condujo a un crecimiento significativo en sectores estratégicos seleccionados por el gobierno japonés de la posguerra, incluyendo la industria pesada, la maquinaria, el equipo petroquímico, la refinación, la electrónica y la automoción.

Además, el superávit comercial que Japón mantuvo con sus socios comerciales le permitió reinvertir en ciencia y tecnología, reparar los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial y establecer un modelo de desarrollo que ofrecía Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) como mecanismo de crecimiento. No obstante, a pesar de que el Estado desarrollador japonés logró cumplir sus objetivos, también ha enfrentado desafíos y señales de agotamiento, como lo evidencian la burbuja financiera de los años 90 y la crisis económica resultante. Este agotamiento se manifiesta en el bajo crecimiento económico, complicando el modelo exportador japonés, especialmente ante la creciente competencia de otros países, como China y Corea del Sur, en sectores donde Japón había sido tradicionalmente dominante.

Sin embargo, la coyuntura internacional ofrece a Japón una nueva oportunidad para reanudar su crecimiento a través de una mayor exportación de capitales y bienes de capital, enfocándose en sectores clave para su economía, como el proceso de relocalización. Para capitalizar esta oportunidad, es crucial que Japón responda con agilidad y que sus estrategias de diplomacia económica no deterioren las relaciones con sus vecinos. Si se logra esta conciliación, Japón podría recuperar una trayectoria de crecimiento.

En este orden de ideas, se plantea una pregunta fundamental que representa un reto para futuras investigaciones comparativas entre América Latina y Japón: ¿qué lecciones puede extraer la región del modelo de desarrollo japonés? Sin duda, hay mucho que aprender. Sin embargo, un paso primordial es establecer un proyecto nacional a largo plazo que integre los intereses nacionales con las realidades latinoamericanas. A pesar de los paralelismos y divergencias en los enfoques económicos e ideológicos que han surgido en los últimos años, es fundamental abrir un diálogo interregional que impulse procesos de integración contemporáneos, como la Alianza del Pacífico y MERCOSUR, que podrían dar lugar a importantes proyectos horizontales de desarrollo e industrialización.

La cooperación para el desarrollo entre Japón y América Latina debe ser abordada desde una perspectiva integral, efectiva y profunda, especialmente en áreas como la ciencia, tecnología y el know-how en bienes de capital y maquinaria. Este enfoque podría transformar las dinámicas de intercambio entre ambas partes, acelerando los grandes esquemas de desarrollo e industrialización que la futura integración latinoamericana podría proponer bajo un marco de regionalismo abierto e inclusivo.

Para que este enfoque prospere, es necesario realizar un mapeo de las capacidades industriales de cada país en la región, buscando promover la complementariedad en las futuras cadenas de valor y suministro. Este esfuerzo se enmarca en el fenómeno del nearshoring, donde un número creciente de inversiones procedentes de Asia busca relocalizarse en América Latina.

Sin embargo, todos estos esfuerzos son inútiles si no existe voluntad política y un plan de implementación claro. Es de esperar que el diálogo político y la cooperación entre varios países de la región, como el caso de México y Brasil, puedan allanar el camino hacia una integración más efectiva. La creación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre estos dos países podría ser el primer paso hacia un mecanismo de integración que incluya a todos los países de la región, estableciendo una ruta clara para un proceso integracionista que priorice la planificación industrial basada en las capacidades específicas de cada nación.

En última instancia, un nuevo mecanismo que se base en la agilidad y el pragmatismo de la Alianza del Pacífico podría desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de un proceso crítico de integración en América Latina, permitiendo a la región avanzar hacia un desarrollo más sostenible y equitativo.

Conclusiones

El estudio del Estado desarrollador en Japón durante los siglos XIX y XX revela un enfoque sistemático y bien orquestado en la intervención estatal para la promoción del crecimiento económico. Este modelo se fundamentó en la capacidad del Estado para articular políticas públicas que impulsaran sectores estratégicos, como la industria y la tecnología. A través de un marco normativo adecuado, Japón logró fomentar un entorno propicio para la inversión privada, apoyándose en instituciones sólidas que garantizaban la estabilidad económica y política. Este enfoque sugiere que América Latina podría beneficiarse de un Estado más proactivo que actúe como catalizador del desarrollo, en lugar de adoptar un rol meramente regulador o pasivo. En este sentido, las experiencias japonesas, particularmente en términos de industrialización acelerada y planificación económica estratégica, ofrecen valiosas lecciones para América Latina, donde el desarrollo ha estado marcado por ciclos de crecimiento interrumpidos y crisis recurrentes. La posibilidad de replicar un modelo de Estado desarrollador debe considerarse con atención, no solo en términos de políticas económicas, sino también en el fortalecimiento de la infraestructura y la educación. La formación de capital humano altamente cualificado y la inversión en tecnología son componentes esenciales que podrían facilitar un crecimiento económico más sostenido y equitativo en la región.

La experiencia de Japón indica que las políticas agrícolas deben enfocarse en la modernización y la sostenibilidad, incorporando técnicas avanzadas y promoviendo la cooperación entre agricultores. Para América Latina, esto podría traducirse en un enfoque integrado que vincule la modernización agrícola con las iniciativas industriales, fortaleciendo así la resiliencia económica y en donde la integración económica dentro de América Latina podría ser un motor de crecimiento, permitiendo a los países de la región superar las barreras comerciales y mejorar su competitividad a nivel global. Un enfoque en políticas de comercio que favorezcan la cooperación y el intercambio dentro de la región podría llevar a una mayor sinergia económica y al aprovechamiento de los recursos locales, acompañado, claro del fomento de un ecosistema que promueva la investigación, el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías es fundamental para elevar la productividad y la competitividad. Este impulso hacia la innovación debe ir acompañado de políticas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que son vitales para el tejido económico de la región.

A pesar de los logros del modelo japonés, es fundamental reconocer que no todos los aspectos son directamente transferibles a América Latina. Las diferencias en el contexto socioeconómico, la historia política y las estructuras de poder requieren un enfoque matizado que considere las particularidades de cada país. Las políticas que funcionaron en Japón deben ser adaptadas a la realidad de América Latina, donde se deben abordar problemas persistentes como la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, es imperativo que las estrategias de desarrollo sean inclusivas y participativas, garantizando que todos los sectores de la sociedad se beneficien del crecimiento.

Finalmente, el papel del Estado como facilitador del desarrollo económico no puede ser subestimado. La colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil es esencial para establecer un marco que favorezca el desarrollo sostenible y equitativo. El modelo japonés muestra que la participación de diversas partes interesadas en el proceso de formulación de políticas puede conducir a soluciones más efectivas y contextualizadas. Para América Latina, promover un diálogo continuo entre el sector público y privado, así como involucrar a la sociedad civil, puede ser clave para construir un consenso en torno a las políticas de desarrollo que aborden las necesidades y aspiraciones de la población.

Referencias

- Calder, K. (1988). The political economy of international relations: Japan's role and choice. En T. Inoguchi (Ed.), "Japanese foreign economic policy formation: Explaining the reactive state" (Vol. 40, No. 4, pp. 517-541). <https://doi.org/10.2307/2010317>
- Fajnzylber, F. (1983). "La industrialización trunca de América Latina". Nueva Sociedad.
- Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford University Press.
- Kojima, K. (1973). "A macroeconomic approach to foreign direct investment (1)". Hitotsubashi University. <https://doi.org/10.15057/8008>
- Laborde Carranco, A. A., & Hayashi, K. (2024). "La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de Japón en América Latina, 1960-2022: desafíos en la época de dos superpotencias". CIMEXUS, 19(1). <https://cimexus.umich.mx/index.php/cimexus/article/view/534>
- Livingston, J., Moore, J., Oldfather, F., & Livingston, J. (1974). "Postwar Japan, 1945 to the present" (1st ed.). Pantheon Books.
- López Villafaña, V. (1994). "La nueva era del capitalismo: Japón y Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico 1945 - 2000" (1st ed.). Siglo Veintiuno Ed.
- Norman, E. H. (2000). "Japan's emergence as a modern state: Political and economic problems of the Meiji period" (60th anniversary ed.). UBC Press.
- Pipitone, H. (2007). La salida del atraso: Un ensayo sobre el desarrollo en América Latina. Fondo de Cultura Económica.
- Romero, J., & Berasaluce, J. (Eds.). (2020). "Estado desarrollador: Casos exitosos y lecciones para México" (Primera edición electrónica). El Colegio de México.
- Sumiya, M. (2000). "A history of Japanese trade and industry policy." Oxford University Press.
- Valdivieso, P. (1997). Experiencias de modernización y desarrollo relevantes para América Latina: El caso de Japón. "Revista Ciencia Política, XIX", 18-36.